

# PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

■ Víctor Manuel Oropeza

■ Violencia en Chihuahua

**V**íctor Manuel Oropeza, el médico homeópata y articulista del *Diario de Juárez*, asesinado bestialmente el 3 de julio por la noche en Ciudad Juárez, dedicó su primer artículo en ese periódico, el 2 de junio de 1984, a condenar el asesinato de don Manuel Buendía. Sus juicios de entonces le son aplicables a él mismo hoy: ■ 4

1991

“...supo descubrir a los enfangados, a los corruptos, a los indecentes, y desde su columna exhibirlos. Única forma que tienen los ciudadanos para combatir a quienes desde el poder medran en su muy particular beneficio, a costa del creciente empobrecimiento de la nación mexicana.

“¿Cuántos intereses mezquinos de los poderosos habrá afectado... desde su columna? No lo sé, lo que sí sé es que las autoridades correspondientes deberán buscar al asesino entre esos poderosos. Quien armó a los asesinos seguramente está en la esfera del poder, del poder de ahora o del inmediato pasado...”

Y al referirse a don Dolores Avalos, la viuda de don Manuel, Oropeza habló de ella como hoy es debido mencionar a su propia viuda, doña Patricia Martínez, que descubrió el cadáver de quien fuera su marido, en su propio consultorio: “Valerosa mujer con sus tres hijos, huérfanos ahora. ¡Cuánto dolor deben sufrir por la muerte de ese valiente periodista! ¡Cuánto orgullo deben sufrir por la calidad de ese hombre!”

Oropeza, poblano radicado hace treinta años en el antiguo Paso del Norte, se había asentado firmemente en la vida de la localidad, como lo muestra la conmoción causada por su muerte. Ciudad Juárez entera está consternada: así se pudo apreciar en el sepelio, efectuado el viernes 5; en la atención abundante y solidaria, que todos los medios de información juarenses otorgan al acontecimiento; y se advertirá de nuevo esta misma noche, a las 19 horas, cuando se efectúe un acto luctuoso en la plaza donde está el monumento a don Benito Juárez.

En ese mismo lugar, hace exactamente cinco años, el doctor Oropeza era protagonista de uno de los muchos gestos cívicos que caracterizaron su vida. Junto con el señor Francisco Villarreal, un empresario retirado, realizó un ayuno en pro de la democracia, al mismo tiempo que en Chihuahua capital el entonces alcalde de aquella ciudad, y hoy dirigente nacional del PAN, don Luis H. Álvarez, hacía lo propio.

Tuve entonces oportunidad de hablar con Oropeza. Ni él ni Villarreal eran panistas. Oropeza había participado en la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, y sin fricciones se había apartado de esa organización, porque prefería ejercer acciones cívicas, y a su espíritu le cuadraba mal la disciplina necesaria en los partidos. Pero conservaba relaciones respetuosas y aun de afecto con sus antiguos correligionarios, por lo que pudo recibir sin dificultad al ingeniero Heberto Castillo, que visitó a los tres ayunantes y les propuso otras formas de lucha democrática, que no pusieran en riesgo su vida. La huelga de hambre terminó a mediados de agosto, luego de 45 días de iniciada, sin conseguir que la ciudadanía hallara respeto a su voluntad.

Fernando Baeza fue entonces elegido gobernador, en medio de una fuerte oposición que después ha declinado. Ha crecido, en cambio, la inseguridad pública, al punto de que en particular los juarenses sienten vivir en medio de la zozobra que nace de que los jueces no sean jueces, los policías no sean policías ni las cárceles sean cárceles. En los cinco años casi completos del gobierno de Baeza, 171 crímenes permanecen en la impunidad. Y los que se resuelven no



Militantes del PRT pegan propaganda en las paredes, habilitadas como aparadores de ofertas políticas ■ Fotos: Arturo Guerra



concluyen en toda la verdad. Tal es el caso por ejemplo, del asesinato de la periodista Linda Bejarano, ultimada a tiros, con la participación de muchos agentes judiciales federales, el 24 de julio de 1988. Es verdad que hay seis personas procesadas por ese crimen, pero las circunstancias de su detención fueron tan extrañas, que los periodistas de Juárez sienten que no se han aclarado suficientemente las causas del tumultuario homicidio.

Tal clima favorable al crimen surge de incapacidades técnicas y carencia de voluntad política, que en casos donde se involucran la seguridad ciudadana y la paz social se convierte en verdadera complicidad. Asombra saber, por ejemplo, que el comienzo de la indagación sobre el crimen de Oropeza no incluyó la elemental toma de huellas dactilares, que se realizó hasta muchas horas después, cuando no pocas personas habían estado en el consultorio donde se localizó al activista cívico.

No fue casual, por eso, que en el sepelio del doctor Oropeza la muchedumbre rompiera el silencio habitual de las ceremonias funerales para abuchear al procurador José Miller Hermosillo, que viajó de Chihuahua a Juárez, y al alcalde Jesús Macías, en quienes vio la encarnación del poder al que los ciudadanos atribuyen el homicidio. No es un comportamiento irracional el que ha movido a los juarenses a actuar así: cuando la impunidad de los delitos se convierte en uno de los elementos del clima social, ya no es dable achacarla a la mera ineptitud, sino a la conjunción de intereses entre quienes deben ser perseguidos por la justicia y la justicia misma.

Los colaboradores editoriales del *Diario de Juárez* publicaron ayer sábado un llamado a las autoridades para resolver el caso en que perdió la vida el doctor Oropeza. Pero sin perder de vista la importancia de este homicidio, que tan entrañablemente les duele por la proximidad de la víctima, no se les oculta que ese crimen es parte de una batalla que va siendo ganada por el delito organizado, y que mientras esa situación persista es ingenuo demandar acciones a quienes ostensiblemente no quieren ejercerlas. Les preocupa que muchas víctimas sin nombre conocido, sin participación relevante en la comunidad, hayan caído sin que la sociedad se sacuda para exigir el fin de la impunidad.

A su vez, el editorial del *Diario de Juárez* proclamó, el 5 de julio, estas verdades que conviene citar *in extenso*: “Tanto insistimos en la necesidad de que el poder público pusiera fin a esa escalada, tantas veces advertimos que de la ineptitud y la complacencia oficiales sólo podían derivarse mayores y más graves expresiones de ese mal, que hoy no podemos sino manifestar la indignación y la amargura que nos embargan al sufrir en carne propia la brutal constatación de nuestras advertencias.

“Se impone por ello exigir, para la absurda muerte de un luchador social que si por algo pugnó en la vida, fue precisamente por la necesidad de erradicar la soberbia y la sordera gubernamentales, hoy puntualmente exhibidas en este asesinato que por muchas razones es también una denuncia de las nefastas consecuencias que acarrea la indolencia oficial.

“Y se impone, asimismo, señalar claramente que una de las causas concurrentes de estos hechos es la falta de autoridad y la indulgencia con que el actual gobierno del estado suele encarar aun los más repugnantes desvaríos de su aparato de justicia. Para decirlo hoy, no nos mueve el revanchismo ni nos alienan los resabios. Lo hemos sostenido siempre, y esta vez lo reiteramos asomados al abismo de un asesinato que irrita y que consterna. Hoy declaramos que Chihuahua vive en el epicentro del más agudo vacío de poder y que esa es la primigenia razón de los actuales niveles de descomposición social y deterioro de los derechos humanos, sin duda los más graves que se hayan registrado en la historia de la entidad.

“No nos basta, por ello, con una pública declaración de duelo y una promesa de justicia. Demandamos, sí, que esa proditoria infamia sea esclarecida hasta sus últimas consecuencias y castigada con todo el rigor de la ley, pero no dejaremos en el propósito de que las autoridades asuman inequívocamente su responsabilidad en el baño de sangre que padece el estado, y desagraven a la sociedad por todas las criminales consecuencias que han acarreado su negligencia, su permisividad y su cinismo.

“Que a estas alturas siga al frente de la Procuraduría de Justicia del estado un personaje probadamente incapaz e irresponsable; que a un jefe policiaco repudiado por la sociedad y perseguido por el escándalo se le haya acogido en el presupuesto estatal; y que incluso esa y

otras deplorables decisiones hayan sido defendidas por el gobernador con argumentos francamente despóticos, tales son algunos de los numerosos indicios que hablan de la irresponsabilidad con que se atienden las delicadas materias del derecho y la seguridad pública.

“Obviamente, esa blandenguería no ha hecho sino auspiciar la prepotencia policiaca y la impunidad del crimen. Bajo un gobierno así, nuestro estado es campo fértil para la violación de las garantías y el florecimiento de la delincuencia. Palmo a palmo, y así abonado por la arrogancia y la prepotencia oficial, ese monstruoso espectro ha ido cubriendo la geografía estatal con su inexorable estela de muerte y destrucción de hogares, de conmoción y de terror entre la opinión pública”.

En el trasfondo de esta violencia, tan vehementemente denunciada por Oropeza y por este editorial, aparece el narcotráfico, y también la Policía Judicial Federal, todavía. Alejandro Oropeza Martínez, hijo mayor de la víctima, recordó, según el reporte de *La Jornada* de ayer, “las amenazas telefónicas contra su padre durante la época en que escribió contra el ex subprocurador Javier Coello Trejo: ‘No le tire al jefe. Se va a acordar de nosotros, doctorcito’”. Según versión de *El Universal*, la señora Patricia Martínez, viuda de Oropeza, dijo que “Victor criticaba mucho a funcionarios de la Procuraduría General de la República y al gobernador Fernando Baeza, quienes lo amenazaban siempre”. A su vez, en nombre de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el sacerdote jesuita José J. Llaguno, obispo de la Tarahumara, demandó que “este crimen no quede impune, como ha ocurrido con otros, por la ineficiencia de las autoridades responsables de la administración de justicia en el estado, situación que ha favorecido el clima de violencia e inseguridad que impera en el pueblo de Chihuahua”.

Caundo, el año pasado, el 17 de octubre, partidos políticos, asociaciones de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron ante Baeza los abusos del comandante de la Judicial Federal en Chihuahua, Elías Ramírez Ruiz, el gobernador se permitió una insinuación insidiosa: “Ojalá no estén financiados por el *narco*”, dijo refiriéndose a los propios denunciantes. Y es que Ramírez Ruiz, guardaespaldas de Baeza cuando fue oficial mayor y subprocurador de la República, cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo estatal, no obstante su crecida mala fama pública. Esta, por lo demás, se asienta en hechos objetivos como el de que fuera, en 1984, jefe del grupo asentado en Parral, a sólo 60 kilómetros del rancho El Búfalo, donde se encontró el más grande cargamento de marihuana en la historia, y se tomó el hilo que condujo después a la captura de Rafael Caro Quintero.

Oropeza fue acuchillado, luego de que impidió que se le cubriera la cara con una bolsa de polietileno, acaso para sofocarlo. Los navajazos que se le infligieron indican que lo torturaron antes de matarlo. No faltaba en el consultorio ningún efecto de valor. Luego, el móvil no fue el robo. Así, hay materia para presumir que el asesinato es político, motivado por su actividad civil y periodística.

Condenémoslo a gritos y exijamos justicia, en voz muy alta también.